



REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CALI

Santiago de Cali, trece (13) noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

Radicación	76001-33-33-004- 2024-00211 -00
Demandante	José Alberto Lasso Giraldo y otros repare.felipe@gmail.com
Demandados	Distrito Especial de Santiago de Cali y otros
Medio de Control	Reparación Directa
Link	SAMAI Proceso Judicial En el encabezado de esta providencia encontrará el código QR con el enlace del expediente
Asunto	Inadmite demanda

I. ANTECEDENTES

El señor José Alberto Lasso Giraldo y otros a través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de Reparación Directa, presentaron demanda en contra del Distrito Especial de Santiago de Cali, Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A, Aseguradora Solidaria de Colombia S.A, Chubb Seguros Colombia S.A y SBS Seguros Colombia S.A, con el fin de que se declare administrativa y patrimonialmente responsables a las Entidades por los perjuicios morales y materiales, con ocasión a las lesiones que sufrió el señor José Alberto Lasso Giraldo por irregularidades en una vía de la ciudad de Cali.

II. CONSIDERACIONES:

Por lo tanto, corresponde al Despacho pronunciarse sobre la demanda instaurada en ejercicio del medio de control de Reparación Directa, a fin de verificar si la misma cumple los requisitos legales, para ser admitida.

1. DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Conforme al artículo 104 y 155 del CPACA la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa y de los "De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes."

En el presente asunto, se pretende la declaratoria de responsabilidad del Distrito de Santiago de Cali y sus aseguradoras, con ocasión al accidente de tránsito que sufrió el señor José Alberto Lasso Giraldo el día 12 de noviembre de 2022, al encontrarse la vía en mal estado, siendo esta Corporación competente para conocer del presente asunto.

1.1 FACTOR TERRITORIAL

El numeral 6 del artículo 156 del CPACA en cuanto a la competencia territorial señala: "*En los asuntos de reparación directa se determinará por el lugar donde se produjeron los hechos, las omisiones o las operaciones administrativas, o por el domicilio o sede principal de la entidad demandada a elección del demandante.*"

En el presente asunto, los hechos que originaron la demanda sucedieron en el Distrito Especial de Santiago de Cali – Valle del Cauca, en tal sentido se encuentra debidamente configurada la competencia por el factor territorial en el presente asunto.

1.2 FACTOR CUANTÍA

El artículo 157 del CPACA respecto a la competencia por razón de la cuantía señala: "(...) *la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ella pueda considerarse la estimación de los perjuicios inmateriales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen*".

En el presente asunto, se configura una acumulación subjetiva de pretensiones, toda vez que son perjuicios que provienen de la misma causa, versan sobre el mismo objeto, tiene relación de dependencia y sirven las mismas pruebas para todos.

En virtud de lo anterior, se tiene que la estimación razonada de la cuantía señalada en el libelo de la demanda, hace referencia a los perjuicios materiales, equivalentes a \$ 119.964.801, por lo que dicho valor no supera el tope de los 1000 SMLMV¹, por lo que al tenor del art. 152 del CPACA el proceso de la referencia en razón a la cuantía y al factor territorial es de competencia de los juzgados administrativos de Cali.

2. REQUISITO DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL

El Despacho advierte que antes de incoar las acciones contencioso administrativas se debe hacer la conciliación prejudicial como lo consagra el artículo 161 del CPACA: "*Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.*"

En los documentos aportados al expediente digital, no obra constancia de conciliación, sin embargo, es claro para el Despacho que el demandante solicitó medidas cautelares las cuales denominó "Periculum in mora" y la "innominada".

Ahora bien, el CPACA en el numeral 1 del artículo 161, dispuso los requisitos previos para demandar cuando los asuntos son conciliables:

"1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.

El requisito de procedibilidad será facultativo en los asuntos laborales, pensionales, en los procesos ejecutivos diferentes a los regulados en la Ley 1551 de 2012, en los procesos en que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial, en relación con el medio de control de repetición o cuando quien demande sea una entidad pública. En los demás asuntos podrá adelantarse la conciliación extrajudicial siempre y cuando no se encuentre expresamente prohibida."

De lo anterior podemos extraer que es facultativa la presentación de la conciliación en los procesos que se soliciten medidas cautelares de carácter patrimonial.

Solicitó la parte actora el decreto de la siguiente medida:

Conforme al Literal B Numeral 1 del artículo 590 del C.G. del P: Inscripción de la demanda en el registro mercantil del establecimiento de comercio denominado "SEGUROS GENERALES SURAMERICANA" con matrícula 21-480885-02 de la cámara de comercio de Medellín propiedad del demandado SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., identificado con NIT No. 890903407-9.

¹ Salario mínimo 2024 - \$1.300.000 x 1000 = \$1.300.000.000

No obstante, no se indicó ningún argumento que sustentara su solicitud, pues se hizo referencia a la innominada que deja al arbitrio del juez la necesidad de decretarla y el Periculum in mora o perjuicio de la mora, que busca con el decreto de la medida, garantizar la efectividad de la decisión de fondo, esto es teniendo en cuenta que en el transcurso de proceso se den situaciones que impidan el cumplimiento².

Ahora bien, tal como lo señaló el Consejo de Estado³, este tipo de medidas deben analizarse bajo la óptica del carácter y no de los efectos, veamos:

Cabe precisar que cuando hablamos del carácter de una cosa nos estamos refiriendo, conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española al «[...] Conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad, que las distingue, por su modo de ser u obrar, de las demás [...]»⁸, esto hablando, entonces, de que la medida cautelar debe ser patrimonial, no tener efectos patrimoniales, entendiendo por efecto, «[...] Aquello que sigue por virtud de una causa [...]»

La medida cautelar, entonces, debe ser patrimonial, entendiendo patrimonial como «[...] relativo al patrimonio [...]»¹⁰ y patrimonio como «[...] Conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica, o afectos a un fin, susceptibles de estimación económica [...]»¹¹, lo que nos lleva a indicar que cuando el artículo del CGP se refiere a las medidas cautelares de carácter patrimonial se está refiriendo a medidas que directa e inmediatamente afectan el patrimonio de las personas naturales o jurídicas que deben soportarlas.

El concepto anterior coincide con la clasificación de las medidas cautelares elaborada por un sector de la doctrina, que destaca que dichas medidas pueden ser de carácter patrimonial o de carácter personal, entendiendo por las primeras «[...] 12.3.1. DE CARÁCTER PATRIMONIAL [...] Como su nombre lo indica, son aquellas que tienen como propósito primordial la afectación de bienes [...]»

Es claro, entonces que, y a manera de ejemplo, el embargo de bienes tiene el carácter de medida patrimonial¹³ en tanto que directamente «[...] sustrae del comercio el bien cautelado, de tal suerte que si se llegare a vender un bien que soporta un embargo, tal contrato será declarado nulo, de nulidad absoluta, por objeto ilícito. En caso de que el bien esté sujeto a registro, y sobre él se inscribe un embargo, el correspondiente registrador debe abstenerse de registrar cualquier acto de disposición sobre el bien, como una venta o una hipoteca [...]»¹⁴, lo cual no ocurre con la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos

Teniendo en cuenta lo anterior, en principio puede concluirse que el requisito de conciliación no resulta exigible frente a SEGUROS GENERALES SURAMERICANA, pero no ocurre lo mismo frente a las demás entidades demandadas.

En efecto, de acuerdo con la interpretación finalista de la norma, es necesario que se solicite el decreto y la ejecución de una medida cautelar, la cual, además, debe revestir un carácter patrimonial. Esta exigencia cobra pleno sentido, dado que, por su naturaleza económica o patrimonial, la efectividad de tales medidas depende de que el demandado no tenga conocimiento de la existencia del proceso en su contra, lo que le permitiría evadir el cumplimiento de una eventual orden judicial que las decrete.

En dicho sentido, al no observarse alguna medida de carácter patrimonial contra las demás entidades demandada, particularmente el Municipio de Santiago de Cali, el Despacho procederá a inadmitir la demanda para que se subsane dicho yerro.

² CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Consejero ponente: ARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO Bogotá, D.C., cinco (5) de julio de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-28-000-2018-00033-00

³

SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Bogotá, D.C., seis (6) de octubre de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 25000-23-41-000-2015-00554-01

3. DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

Respecto de la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA dispone: *"2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: (...) i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia."*

En el presente asunto, los hechos que dieron origen a la demanda ocurrieron el **12 de noviembre de 2022** (fecha del accidente), por lo que inicialmente los dos (2) años para interponer el medio de control vencen el 13 de noviembre de 2024, es decir, que la interpusieron dentro del término legal establecido.

4. DEL PODER Y LA LEGITIMACIÓN EN ACTIVA Y PASIVA.

Con relación a la legitimación por activa, se tiene a esta como la posibilidad que tiene aquella persona que ha sufrido un daño para obtener el resarcimiento por medio de la jurisdicción contenciosa administrativa.

Respecto al derecho de postulación, el artículo 160 del CPACA señala que: *"Quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa."*

En el presente asunto, se tiene que una vez revisados los archivos adjuntos que conforman la demanda, se verificó que **fue aportado** poder otorgado por los señores José Alberto Lasso Giraldo, Kevin David Lasso Rojas, Shirley Johanna Lasso Rojas, Brayan Alberto Lasso Rojas y Eileen Jattin Lasso Rojas, al togado Luis Felipe Hurtado Cataño.

Adicionalmente se encuentra que el Distrito Especial de Santiago de Cali se encuentra legitimado para comparecer a este proceso, al indicar que por defectos en las vías públicas del municipio ocurrió el siniestro.

Por otra parte, el actor demanda a las aseguradoras Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A, Aseguradora Solidaria de Colombia S.A, Chubb Seguros Colombia S.A y SBS Seguros Colombia S.A, sin embargo, no se encuentra dentro de la documentación aportada, la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 1507222001226 que menciona, por lo cual no es posible verificar las entidades del coaseguro y si bien **no constituye una causal de inadmisión de la demanda**, se requiere de dicho anexo para la debida integración del contradictorio.

5. DE LOS REQUISITOS FORMALES

En cuanto a los requisitos formales contemplados en el artículo 162 del CPACA, evidencia este operador judicial lo siguiente:

- Debe determinar con claridad hechos y pretensiones, toda vez que no hay congruencia entre estos, pues en el acápite de pretensiones solicitan la declaratoria de responsabilidad de los señores Andrés Felipe Enríquez Potosí, Oscar Eduardo Cobo Ordoñez y la Aseguradora Seguros Generales Suramericana S.A, quienes no se encuentran determinados como partes dentro del proceso, y por otra parte, no encuentra pretensión frente a una Entidad Pública, es decir, no habría competencia por parte de este Operador Judicial para conocer del proceso.
- Indicar fundamentos de derecho en torno al proceso administrativo, toda vez que los enunciados corresponden a materia civil.

6. CONCLUSIÓN:

En consecuencia, se procederá a **inadmitir** la demanda, para que la parte demandante subsane lo siguiente:

- Requisito de conciliación prejudicial frente a las entidades demandadas, salvo
- Defina con claridad, hechos, pretensiones y fundamentos de derecho

Para lo cual, en los términos del artículo 170 del CPACA, se le concede en un término de (10) días para subsanar el mencionado yerro, so pena de rechazar la demanda como lo dispone el artículo 169 ibídem.

Adicionalmente, se le requerirá a la parte demandante, **sin que esto constituya una causal de inadmisión**, aporte póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 1507222001226.

Siendo las cosas de esta manera, el Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO: INADMITIR la presente demanda que en ejercicio del medio de control de Reparación Directa promueve el señor José Alberto Lasso Giraldo y otros en contra del Distrito Especial de Santiago de Cali, Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A, Aseguradora Solidaria de Colombia S.A, Chubb Seguros Colombia S.A y SBS Seguros Colombia S.A

SEGUNDO: Notifíquese por estado la presente providencia al demandante.

TERCERO: Otórguesele a la parte actora en este asunto, el termino de diez (10) días para que corrija la demanda en las formas ya expuestas, conforme lo establece el artículo 170 del C.P.A.C.A.

CUARTO: REQUERIR a la parte demandante, para que en el término de diez (10) días, aporte póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 1507222001226.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente por Samai)
JONATAN GALLEGO VILLANUEVA
Juez

ERM